

**INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
223 DE 2012 SENADO, 145 DE 2011 CÁMARA**

por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
el funcionamiento de los departamentos.

Bogotá, D. C., mayo 3 de 2012

Doctor

LUIS FERNANDO VELASCO CHÁVEZ

Presidente

Comisión Primera Senado

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 223 de 2012 Senado, 045 de 2011 Cámara, *por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.*

Apreciado señor Presidente:

En cumplimiento de la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional del honorable Senado de la República, nos permitimos rendir el siguiente informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 223 de 2012 de Senado, 045 de 2011 Cámara, *por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.*

I. Consideraciones de los ponentes

Uno de los desarrollos legales pendientes desde la expedición de la Constitución Política de 1991 es el nuevo régimen departamental: Para hacer realidad el mandato constitucional de la autonomía territorial y la profundización del proceso de descentralización el legislador debe revisar el papel del departamento como entidad territorial intermedia de Gobierno.

Se requiere lograr, mediante un esfuerzo de esta naturaleza, la especificación de las competencias básicas del departamento, la clarificación de las relaciones con los demás niveles de gobierno y especialmente con el nivel nacional, una mayor flexibilidad para la asociación y el trabajo colectivo, la apertura de espacios y mecanismos

para optimizar el ordenamiento territorial y el mejoramiento de los mecanismos de control político, interno, fiscal y social a la gestión pública.

No es posible que hoy los departamentos no tengan una legislación actualizada en materia de funciones, competencias y recursos y que todavía estén restringidos al Decreto-ley 1222 de 1986, muy anterior a la Constitución Política de 1991 y bastante precario para las condiciones de competitividad que exige la normatividad actual.

A la luz de estas necesidades, se requiere plantear un nuevo régimen departamental actualizado a los desarrollos constitucionales, jurisprudenciales, la reforma política y los nuevos retos en materia de productividad, competitividad, así como la implementación del TLC, entre otros aspectos, sobre la base de un modelo que recoja los principios de diversidad, la autonomía territorial, la competitividad, la transparencia y el control político de cara a la comunidad.

Pensamos que el departamento debe ser en verdad el nivel intermedio de Gobierno, entre la Nación y los municipios, para que actúe como articulador de la política nacional en el nivel territorial, como eje del desarrollo local, armónico e integral de la política sectorial de la nación en el territorio, en materia de salud, empleo y vivienda, propendiendo por una verdadera descentralización, pero sin desarticular los principios de unidad nacional.

Con esta iniciativa legal podremos tener un estándar de competencias y de funciones específicas diferenciadas según tipologías de departamentos, haciendo énfasis en sus ventajas competitivas, para que las funciones del Amazonas, por ejemplo, sean especiales y tengan énfasis en los temas medioambientales, indígenas, culturales y turísticos; o las del Atlántico, tengan prioridad en los temas portuarios, en el empleo, en el comercio exterior; o las del Meta, puedan tener énfasis en el desarrollo ganadero y de infraestructura, mientras que Chocó pueda dar prioridad al saneamiento básico, la educación, la salud, según su nivel especial de desarrollo y sus potencialidades particulares.

Por ejemplo, San Andrés y Providencia necesitan un capítulo aparte y especial en esta ley para un régimen especial, como lo señala la Constitución.

Como lo quieren y sugieren los gobernadores, el proyecto establece que la Nación podrá delegar en los departamentos el ejercicio de algunas atribuciones propias de los organismos y entidades públicas nacionales, trasladando recursos, funciones y competencias ejecutoras y de coordinación, tal delegación se realizaría para temas relacionados con agricultura, adecuación de tierras, reforma agraria, medio ambiente, capacitación para el empleo, ciencia y tecnología, competitividad, sistemas de información, catastro, cooperación técnica internacional, bienestar familiar, atención a la población vulnerable, turismo y vías secundarias.

Los departamentos de frontera deben tener un capítulo especial en esta ley: Las fronteras son las zonas de consolidación institucional no solo de la seguridad, sino del desarrollo económico, de la competitividad, de la generación de proceso de integración fronterizo.

El artículo 289 de la Constitución así lo señala, pero no podemos dejarlo escrito en letra muerta. Un capítulo especial para los departamentos de frontera en esta ley estará sustentado en la reglamentación del procedimiento y condiciones fiscales, aduaneras, migratorias y comerciales para las regiones de frontera.

En igual sentido, las Asambleas Departamentales tienen que fortalecerse como órgano institucional, tanto administrativa como políticamente. Es cierto que la Ley 617 de 2000 obligó a un fuerte ajuste fiscal a las entidades territoriales necesario en su momento y que debe mantenerse para garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Pero llegó la hora de pensar en Asambleas modernas, que para el desarrollo de sus funciones no pueden limitarse solo a una infraestructura mínima, como la que hoy en día tienen: Si queremos una descentralización efectiva, las Asambleas deben tener funciones orientadas con mayor énfasis al ejercicio del control político, de la gestión medioambiental, de la regulación del desarrollo territorial en los planes de ordenamiento.

Por eso es urgente aclarar el régimen prestacional de los diputados. Al respecto, se establece que los diputados y quienes suplieren las faltas absolutas o temporales de estos tendrán derecho a percibir las siguientes prestaciones sociales: Auxilio de Cesantía, Intereses sobre las cesantías y Prima de Navidad, así como la prima de vacaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4ª de 1966 y en los diferentes conceptos emitidos por el consejo de estado y la Comisión Nacional del Servicio Civil al respecto.

Para tal efecto, también señalamos en la iniciativa que los diputados están amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. No sobra resaltar que para efectos de la liquidación del valor máximo de los gastos de las asambleas, contemplados en el artículo 8º de la Ley 617 de 2000, *para el monto básico de liquidación se debe tener en cuenta en la sumatoria, los honorarios de los Diputados, aportes a seguridad social y prima de navidad.* Debe dejarse claro que no podrá percibirse suma o dinero alguna por conceptos diferentes a los aquí establecidos a título de remuneración o prestaciones sociales.

Lo que planteamos es finalmente que las asambleas departamentales podrán determinar dentro de los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 según la categoría del departamento el tope máximo de reconocimiento los diputados en materia de prestación es, primas o gastos de representación a que tengan derecho de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

También queremos hacer énfasis en la necesidad de fortalecer el control político y la moción de censura a cargo de las asambleas: Este proyecto de ley de régimen departamental incluye un énfasis en la necesidad de darle mayores funciones a las asambleas, pero que garanticen la armónica relación con los gobernadores de los departamentos, sin limitar el ejercicio de funciones administrativas de los Gobernadores, buscando un control político eficiente y efectivo en temas tales como la transparencia, la

rendición de cuentas, la aplicación de presupuestos participativos y la construcción de agendas locales para integrar el desarrollo local.

De otro lado, estamos incorporando en esta iniciativa la inclusión del régimen de bancadas para suplir las vacancias absolutas y las faltas temporales de los diputados en esta nueva iniciativa, con el fin de regular y actualizar la normatividad en la materia.

Creemos que le ha llegado la hora a la Federación de Asambleas Departamentales para que su institucionalidad sea reconocida con mayor fuerza en todo el país: Por eso hemos desarrollado un artículo especial en ese sentido: las asambleas no pueden estar rezagadas de las demás asociaciones y federaciones que agremian el conjunto de niveles de gobierno territorial. Hoy estamos dando ese reconocimiento a los diputados del país en el ejercicio de esta agenda legislativa conjunta que trabajaremos con ustedes, de manera integral.

Nuestro objetivo es poder socializar este proyecto de ley con ustedes, con los Gobernadores, y llevarlo al Congreso de la República en la próxima legislatura, de tal manera que podamos contar con una legislación territorial moderna que tanto municipios como departamentos reclaman con sentido de urgencia.

Se requiere evaluar otras fuentes de recursos derivadas de nuevas funciones dadas a los departamentos y que suponen ingresos por competitividad, comercio, turismo, conservación del medioambiente y desarrollo de la infraestructura en materia de vías secundarias y terciarias y armonización de los planes de ordenamiento territorial de sus municipios.

Es claro señalar que la legislación actual se quedó corta frente a las nuevas realidades políticas, económicas, administrativas y fiscales del país y la descentralización reclama.

Esta ley también permite desarrollar los artículos 302 y 320 de la C. P. en un modelo para la **diversificación de competencias**, que permite asignar a cada tipo de departamento competencias especiales, diferenciadas y que potencien sus ventajas comparativas, tales como el

turismo, la agroindustria o la minería para lo cual se prevé desarrollar una nueva tipología de departamentos, sin modificar la categorización fiscal de la Ley 617 de 2000.

El modelo de un nuevo régimen departamental debe promover las alianzas estratégicas de entidades territoriales que generen economías de escala y proyectos productivos y que faciliten la gobernabilidad efectiva de las entidades territoriales. Se trata de facilitar una integración que, más allá de ser sólo administrativa, permita la materialización del modelo de Buen Gobierno Local.

Este nuevo régimen departamental contempla la especificación de las competencias básicas del departamento, la clarificación de las relaciones con los demás niveles de gobierno y especialmente con el nivel nacional, mediante la celebración de convenios o contratos plan que les permitirán asumir competencias delegadas en los temas que impliquen o supongan gestión de proyectos de inversión para el desarrollo y promoción de la competitividad, la integración comercial con las fronteras y el comercio a nivel local, como locomotora de la productividad y de la asociatividad.

Con esta propuesta se busca fortalecer al departamento para que este se constituya en realidad en el nivel intermedio de Gobierno entre la Nación y los municipios actuando como eje articulador del desarrollo local, armónico e integral de la política sectorial de la Nación en el territorio, en materia de salud, empleo y vivienda, propendiendo por una verdadera descentralización, pero sin desarticular los principios de unidad nacional.

Esta iniciativa hace énfasis en la necesidad de darle mayores funciones a las asambleas en materia de control político pero que garantice la armónica relación con los gobernadores de los departamentos, sin limitar el ejercicio de funciones administrativas de los gobernadores, buscando un control político eficiente y efectivo en temas tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la aplicación de presupuestos participativos y la construcción de agendas locales para integrar el desarrollo local.

II. Principales modificaciones

Se hacen modificaciones de fondo y forma en materia tanto de técnica legislativa, estructura de capítulos y definiciones mínimas de conceptos en materia de funciones, atribuciones y competencias.

En materia de la estructura del proyecto de ley se modifica el Título I en materia de funciones y atribuciones y se excluyen aquellas que se consideran redundantes o presentes en otras leyes. En primer lugar, se precisa el alcance del objeto del proyecto así como la definición del proyecto.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto dotar a los departamentos del régimen político y administrativo que garantice el cumplimiento de las competencias y atribuciones que les asignen la Constitución y la ley.

Artículo 2°. Definición. Los departamentos son entidades territoriales con autonomía para la gestión de sus asuntos, personería jurídica y patrimonio independiente. Se gobiernan y administran por sus propias autoridades, dentro de los límites que la Constitución y la ley establecen.

Son fines del departamento la planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental, la articulación de las políticas sectoriales en su territorio, la coordinación y complementariedad de la gestión municipal y la intermediación entre la Nación y los municipios.

El departamento se constituye en la entidad articuladora y coordinadora de las actuaciones de carácter sectorial del Gobierno Nacional, y es gerente de los asuntos regionales dentro de su territorio.

Lo anterior consideramos fundamental para enmarcar y precisar la definición del proyecto como un nuevo régimen, que no deroga en su totalidad el Decreto-ley 1222 sino que moderniza y actualiza las disposiciones legales vigentes. De manera complementaria, el artículo 144 del proyecto permitirá al Gobierno compilar en una sola legislación la materia.

Posteriormente, por estructura legislativa, se definen de manera independiente las competencias diferenciándolas de las funciones y se elimina el artículo 3° que hace referencia a todas las leyes que pueden tener relación con el tema departamental, lo cual es innecesario y puede resultar ambiguo en la interpretación.

Así mismo, se incorporan principios mínimos esenciales que enmarquen el alcance del proyecto.

El artículo 13 del texto aprobado en Cámara relacionado con tipologías cambia su denominación a criterios para la atribución de competencias y pasa a ser parte del Título VI De la Coordinación territorial y el ejercicio de atribuciones. En igual sentido, se proponen dos artículos nuevos que definen todo el parámetro o marco legal para la asignación de atribuciones a los departamentos, en desarrollo del concepto de contrato plan, a partir del nuevo artículo 127 del texto propuesto en adelante.

Los artículos nuevos aprobados en el texto final en la Cámara pasan a ser parte de la estructura del proyecto dentro del artículo de funciones, en especial en lo que hace referencia a los planes de ordenamiento territorial.

Se modifica el artículo relacionado con los recursos del Fondo Cuenta Especial de la Federación Nacional de Departamentos en un valor del 2% del recaudo previsto, toda vez que el porcentaje es variable y no se puede determinar de manera previa el alcance en recursos. Este artículo pasa de ser el 9 del texto aprobado en Cámara al título final de disposiciones varias (artículo 137 del texto propuesto).

En igual sentido, la competencia en materia catastral aprobada en el texto de Cámara se incorpora dentro del título VI en materia de ejercicio de atribuciones (nuevo artículo 127).

El artículo 7° del texto aprobado en Cámara pasa a ser el nuevo artículo 130 del texto propuesto, de acuerdo a los principios de estructura y técnica legislativa, por coherencia en la unidad de cada capítulo, en materia de emisión de bonos de deuda pública. Así mismo, se sujeta dicho control al Ministerio de Hacienda y no a la Superfinanciera, por competencia misional.

Se acogen así mismo varias recomendaciones de los gobernadores efectuadas en la Cumbre de Pereira del 15 de marzo, entre las que cabe resaltar:

La exclusión del artículo 11 del texto aprobado en Cámara relacionado con asignación de tasas y sobretasas para la delegación de competencias, por posible inconstitucionalidad el mismo, en razón a los principios tributarios de la Constitución Política. Por tal motivo, el texto aprobado en Cámara se suprime totalmente.

En igual sentido, el artículo 16 del texto aprobado relacionado en el tema de autonomía presupuestal de las asambleas por ser restrictivo de la facultad ordenadora del gasto de los gobernadores y de las normas orgánicas de presupuesto, además de la falta de unidad de materia con el proyecto.

En materia de atribuciones de las asambleas, es necesario señalar que se precisa el alcance de la facultad constitucional de las mismas en la autorización a los gobernadores para contratar: al respecto, se señala lo siguiente:

Artículo 11 (anterior artículo 17 del texto aprobado en Cámara).

14. Autorizar de manera general a los gobernadores para la celebración de todos los contratos tendientes a desarrollar los programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo del departamento, en la ordenanza a través de la cual se imparta su aprobación a este último o en sus modificaciones.

15. Autorizar al gobernador de manera general para celebrar todos los contratos tendientes a ejecutar el gasto corriente en la ordenanza a través de la cual se imparta aprobación al presupuesto anual del departamento o en la que apruebe modificaciones al mismo.

Al respecto, es preciso señalar que esta facultad constitucional de las asambleas no está reglada, y por lo tanto requiere la definición precisa de su alcance con el fin de no limitar y restringir la facultad también constitucional de los gobernadores en materia de cumplimiento de su rol administrativo y ejecutivo.

Como contrapeso a esta determinación, y para garantizar el equilibrio en materia de control político, este proyecto de ley fortalece varios criterios para las asambleas, a saber: aplicación del nuevo régimen de bancadas, aplicación de la moción de censura y la moción de observaciones y la posibilidad de citar a debates de control político a funcionarios directivos de entidades descentralizadas del orden departamental, entre otros.

En materia del régimen de prohibiciones, cabe señalar que es necesario ajustar el artículo 90 del texto aprobado en Cámara, nuevo artículo 84 del texto propuesto, toda vez que debe ajustarse a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y que este régimen no puede ser más gravoso que el de los demás servidores públicos.

Se incluyen dos artículos nuevos, con el fin de fortalecer la delegación de atribuciones a los departamentos:

Artículo 126. Delegación de atribuciones. Por medio de Contratos Plan, la Nación podrá delegar en los departamentos el ejercicio de atribuciones propias de los organismos y entidades públicas nacionales, siempre y cuando estas hagan parte integral de la visión de desarrollo territorial multisectorial. La delegación se efectuará previa constatación y verificación de las condiciones y capacidades necesarias para garantizar el adecuado desempeño de la atribución.

La Nación, en asocio con cada uno de los departamentos, adelantará un estudio para comprobar la capacidad técnica, operativa y funcional con el fin de determinar cuáles atribuciones les podrán ser delegadas al departamento.

La delegación mencionada se hará en el marco del Contrato Plan que suscribirá el jefe del organismo o entidad pública nacional con el respectivo gobernador. Se especificarán los programas, proyectos y las actividades que se delegan, los recursos necesarios para su ejecución, el estado de la delegación así como las fases y gradualidad de la misma.

Mediante estos artículos se propone hacer efectiva la delegación de atribuciones prevista en la Ley 1454 de 2011 en materia de contratos plan

y poder garantizar una real descentralización, con criterios y parámetros como los que se definen en el proyecto de ley.

Mediante estos artículos se propone hacer efectiva la delegación de atribuciones prevista en la Ley 1454 de 2011 en materia de contratos plan y poder garantizar una real descentralización, con criterios y parámetros como los que se definen en el proyecto de ley.

Artículo 128. Programas de asistencia técnica. Cuando el desempeño departamental no se efectúe en los términos y condiciones estipulados en el respectivo convenio de desempeño, la Nación establecerá un programa de mejoramiento y asistencia técnica en el que participarán las autoridades departamentales y las entidades nacionales presentes en el territorio. En este programa se definirán los tiempos y las áreas prioritarias de optimización y cualificación, así como los recursos necesarios para su puesta en marcha. Si el departamento no cumple con las condiciones para la prestación de los servicios o el ejercicio de las competencias en los plazos establecidos, la entidad nacional correspondiente podrá reasumir las atribuciones delegadas.

Artículo 129. Criterios para delegación de atribuciones. Para efectos de la delegación de atribuciones y funciones mediante Contrato Plan previstas en la Ley 1454 de 2011, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- i) Nivel de desarrollo económico y social;
- ii) Capacidad de gestión;
- iii) Capacidad fiscal;
- iv) Coherencia de la atribución que se delegue con el proyecto de visión de territorio;
- iv) Características del territorio;
- v) Número de municipios que lo conforman;
- vi) Vocación económica; productiva y competitiva;
- vii) Circunstancias sociales, culturales, étnicas, geográficas y ecológico-ambientales.

Con estos criterios mínimos, aspiramos a que el Gobierno Nacional pueda hacer una delegación efectiva de competencias, adecuada a cada característica de las distintas entidades territoriales.

Por eso cabe resaltar que se incluye un artículo nuevo, de manera complementaria a este, en el Título I, relacionada con regímenes especiales de departamentos, lo cual permitirá aplicar el artículo 302 de la C. P. de manera concordante:

Artículo 8°. Regímenes especiales. En el marco de la división político administrativa vigente, podrán conformarse regímenes especiales departamentales, de acuerdo con sus características geográficas, étnicas, ambientales y culturales.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Por último, a solicitud de los gobernadores en la ya mencionada Cumbre de Pereira del 16 de marzo y de manera concordante con el Documento Conpes 3238 de 2003 se crea el nuevo Consejo de Gobierno de Gobernadores con el Presidente de la República, como un órgano de integración, coordinación y articulación que permitirá hacer efectivos los mandatos y disposiciones de la presente ley.

Artículo 143. Consejo Nacional de Gobernadores. Créase el Consejo Nacional de Gobernadores como instancia de coordinación y ejecución de las políticas públicas sectoriales en el nivel territorial con carácter permanente, el cual será Presidido por el Presidente de la República. La Secretaría Técnica será ejercida por el Ministerio del Interior. El Consejo se reunirá periódicamente cada 3 meses.

El Gobierno Nacional reglamentará sus funciones.

Por lo anterior, los ponentes consideramos de gran importancia para los departamentos la presente iniciativa y sometemos a consideración de la Comisión su aprobación integral.

Se elimina el artículo 3° del texto aprobado en Cámara sobre el régimen de los departamentos.

Se elimina el artículo 5º del texto aprobado en Cámara sobre el principio de economía y buen gobierno.

Se elimina el artículo 11 del texto aprobado en Cámara sobre la delegación de funciones especiales de gestión administrativa.

Se elimina el artículo 15 del texto aprobado en Cámara sobre autonomía presupuestal.

Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitamos a los honorables Senadores aprobar en primer debate el Proyecto de ley número 223 de 2012 Senado, 045 de 2011 **Cámara**, *por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos*, con el pliego de modificaciones adjunto.

De los honorables Congresistas,

CONSULTAR FIRMAS EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

III. PLIEGO DE MODIFICACIONES

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 223 DE 2012 SENADO, 045 DE 2011 CAMARA

*por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los departamentos.*

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

**DEL OBJETO, DEFINICIÓN, PRINCIPIOS RECTORES DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS**

CAPÍTULO I

Artículo 1º. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto dotar a los departamentos del régimen político y administrativo que garantice el cumplimiento de las competencias y atribuciones que les asignen la Constitución y la ley.

Artículo 2º. Definición. Los departamentos son entidades territoriales con autonomía para la gestión de sus asuntos, personería jurídica y patrimonio independiente. Se gobiernan y administran por sus propias autoridades, dentro de los límites que la Constitución y la ley establecen.

Son fines esenciales del departamento la planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental, la articulación de las políticas sectoriales en su territorio, la coordinación y complementariedad de la gestión municipal y la intermediación entre la Nación y los municipios, así como la prestación de los servicios que determine la ley.

El departamento se constituye en la entidad articuladora y coordinadora de las actuaciones de carácter sectorial del Gobierno Nacional.

Artículo 3º. Principios para el ejercicio de competencias. Los departamentos ejercen las atribuciones que les asignan la Constitución y la ley, con especial sujeción a los siguientes principios:

1. Coordinación. Las autoridades departamentales deberán articular y armonizar sus actuaciones con las de otras entidades públicas de los demás niveles de gobierno.

2. Concurrencia. Los departamentos podrán desempeñar sus competencias con apoyo de las entidades del Gobierno Nacional si así fuera necesario para garantizar la óptima prestación de los servicios a su cargo.

3. Subsidiariedad. El departamento apoyará en forma transitoria y parcial a los municipios de menor desarrollo económico y social de su jurisdicción, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre la imposibilidad de ejercerlas debidamente.

4. Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo, formular políticas, ejecutar proyectos de inversión y construir planes, los departamentos podrán hacer uso de los mecanismos de asociación, cofinanciación y suscripción de convenios.

5. Gradualidad. El Gobierno Nacional transferirá nuevas competencias hacia los departamentos de manera progresiva, teniendo en cuenta las

capacidades institucionales y administrativas existentes, así como las condiciones particulares de cada entidad territorial.

6. Economías de Escala. El Gobierno Nacional promoverá la asociación de departamentos para proveer aquellos bienes y servicios públicos que impliquen un alto costo o complejidad. Para incrementar la eficiencia en la prestación de servicios y reducir sus costos de producción se fomentará la integración de los departamentos entre sí y con otras entidades territoriales o esquemas asociativos.

7. Neutralidad Fiscal. No se trasladarán responsabilidades de gasto sin la respectiva transferencia de recursos para su ejecución.

Artículo 4°. Principios para la gestión departamental:

1. Eficiencia. Los departamentos garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.

2. Responsabilidad y transparencia. Los departamentos asumirán las competencias a su cargo, destinando los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera y fiscal y garantizando un manejo transparente y eficiente.

3. Participación. Las autoridades departamentales garantizarán el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones de la gestión pública a través de ejercicios de concertación o discusión en temas relacionados con el desarrollo económico, social y ambiental del territorio. La incidencia ciudadana se desarrollará con arreglo a los postulados de la democracia participativa vinculando a particulares, organizaciones civiles, asociaciones y grupos de acción comunal, entre otros.

4. Economía y Buen Gobierno. La gestión del departamento deberá desarrollarse en el marco del saneamiento fiscal y la profesionalización de su administración, para lo cual se promoverán esquemas que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno.

Artículo 5°. Competencias. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:

1. Articular y coordinar las políticas sectoriales de las entidades nacionales con presencia en su jurisdicción.

2. Brindar asistencia técnica, complementariedad y apoyo a la gestión municipal.

3. Promover y emprender procesos de planificación del desarrollo económico, social y ambiental de su respectivo territorio.

4. Servir de instancia de intermediación e interlocución entre la Nación y los municipios.

Artículo 6°. *Funciones.* En virtud del artículo anterior, corresponde al Gobierno Departamental ejercer las siguientes funciones:

a) **En materia de articulación y coordinación de las políticas sectoriales**

1. Promover de acuerdo con sus particularidades, dentro del ámbito de sus competencias, en coordinación con las entidades del orden nacional que ejerzan funciones en su jurisdicción y con las entidades territoriales, las políticas públicas y las de carácter sectorial en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación institucional.

2. Cumplir y hacer cumplir en cada uno de los municipios de su departamento los decretos y las órdenes del Gobierno Nacional tendientes a la conservación y restablecimiento del orden público.

3. Articular con los municipios de su jurisdicción la política del Gobierno Nacional en materia de atención integral a la población desplazada y a la población víctima de la violencia, complementando administrativa y presupuestalmente las acciones y esfuerzos de los municipios, tanto expulsores como receptores en su calidad de entidades concurrentes y corresponsables, según los principios de concurrencia y subsidiaridad, desarrollando a través de los Comités Departamentales y los Planes Integrales Únicos, las competencias departamentales en materia de ayuda humanitaria de emergencia, prevención, protección y estabilización socioeconómica de la población desplazada, así como las establecidas frente a la población víctima de la violencia, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral para la Población

Desplazada, SNAIPD y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas.

4. Apoyar y acompañar la agenda interna de productividad de los municipios, de acuerdo con las metas establecidas por el Gobierno Nacional para tal fin y establecer programas de cofinanciación de proyectos productivos con el nivel municipal para el desarrollo económico de estos.

5. Gestionar y tramitar acciones administrativas ante organismos internacionales, en coordinación con las respectivas entidades del orden nacional.

6. Articular las políticas nacionales con los planes de ordenamiento territorial.

7. Armonizar los planes de ordenamiento territorial municipal dentro de la jurisdicción departamental, sin perjuicio de las competencias municipales, según la distribución de competencias consagrada en el numeral 2 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, para lo cual los municipios, previa a la aprobación por los concejos municipales, deberán presentar a las secretarías de planeación departamental o quien haga sus veces, el proyecto de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento, con el fin de que estas verifiquen la inclusión de las directrices y orientaciones de ordenamiento territorial departamental, garantizando así la armonización y articulación de los temas de alcance regional.

8. Establecer la Junta Departamental de Coordinación Municipal para fomentar la articulación, apoyo y complementariedad de la gestión municipal y facilitar la intermediación entre el nivel local y la Nación.

9. Fomentar y promover la construcción de su respectiva visión de desarrollo territorial para la suscripción de Contratos Plan, de acuerdo con su vocación económica, ambiental y productiva.

10. Promover y participar en el procedimiento para la suscripción de Contrato Plan entre el Gobierno Nacional y los municipios y esquemas asociativos de su jurisdicción.

b) En materia de asistencia técnica, complementariedad y apoyo a la gestión municipal

1. Diseñar y aplicar los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana con los Alcaldes y Comandantes de Policía del Departamento, así como los programas tendientes a generar una cultura de tolerancia, respeto por la diversidad, convivencia ciudadana y defensa de los derechos humanos, para los habitantes de su territorio.

2. Prestar apoyo técnico a los municipios u otras formas asociativas de entidades territoriales que así lo requieran en materia de fortalecimiento institucional, planificación y ordenamiento territorial y prestación de servicios públicos.

3. Evaluar la gestión y los resultados de la gestión municipal de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados, Sinergia.

4. Asistir a los municipios recién creados en asuntos técnicos, financieros, contables, presupuestales, administrativos y logísticos, dentro de los primeros doce meses a la fecha de su conformación.

c) En materia de planificación del desarrollo económico, social y ambiental de su respectivo territorio

1. Adoptar planes de desarrollo económico y social y de obras públicas que estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Serán elaborados de acuerdo con las normas que establezca la ley y deben coordinarse con los planes municipales, regionales y nacionales.

2. Establecer las directrices y lineamientos para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación, con el fin de determinar los escenarios de uso, conservación y ocupación del espacio de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente, la prevención de desastres, y en función de los objetivos del desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.

3. Ejercer seguimiento y vigilar el cumplimiento de la política ambiental dentro de su territorio, y prevenir de manera articulada con las instancias

pertinentes, la gestión del riesgo medioambiental, de conformidad con los lineamientos fijados por el Gobierno Nacional para tal fin y evaluar el impacto de su gestión.

4. Los departamentos ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar con entidades territoriales limítrofes en territorios con continuidad geográfica, programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos, la preservación del ambiente y el desarrollo productivo y social.

5. Concurrir en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, los recursos naturales y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica, todo de acuerdo con las políticas y programas nacionales sobre la materia y en desarrollo de las decisiones que tomen las autoridades competentes. Con tal fin deben facilitar la coordinación y articulación de las políticas, planes, programas y proyectos ambientales que se cumplan dentro de su jurisdicción, en particular los de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales. También podrán interponer acciones populares y de grupo, que fueren necesarias para proteger el ambiente y los recursos naturales y coadyuvar los que otros hayan iniciado.

6. Crear Provincias Administrativas y de Planificación al interior de su territorio para promover la prestación conjunta de servicios públicos y aprovechar las economías de escala propias de la continuidad geográfica.

d) En materia de intermediación e interlocución entre la Nación y los municipios

1. Representar ante el Gobierno Nacional y otras autoridades y entidades del mismo nivel y por expresa y clara manifestación de voluntad de la entidad territorial local, los intereses de los municipios que no puedan hacerlo directamente por carecer de los medios e instrumentos adecuados para ello.

2. Velar por que las entidades territoriales en su territorio den cumplimiento a las normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos en coordinación con el Gobierno Nacional en la búsqueda de

salidas estructurales a situaciones de déficit o de incapacidad institucional para prestar de manera adecuada los servicios públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.

3. Desarrollar y promover proyectos de infraestructura en materia de vías intermunicipales, saneamiento básico, vivienda y comercio con los municipios que así lo demanden, en desarrollo de los principios de concurrencia y subsidiaridad.

4. Fomentar y promover el turismo conforme a la legislación vigente, Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico; ejercer sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Turística, para garantizar un manejo unificado, racional y coherente del turismo.

Artículo 7°. *Delegación.* Sin perjuicio de la descentralización de funciones y competencias que de conformidad con la ley le corresponde a las entidades que hacen parte de la estructura orgánica de la Nación, esta podrá delegar en cabeza de los departamentos y con los recursos correspondientes para su financiamiento, el ejercicio de funciones ejecutoras y de coordinación propias de los organismos y entidades públicas nacionales, en todo lo relativo a agricultura, adecuación de tierras, reforma agraria, medio ambiente, catastro, capacitación para el empleo, ciencia y tecnología, competitividad, sistemas de información, cooperación técnica internacional, bienestar familiar, atención a la población vulnerable, turismo y las demás que considere necesarias, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011.

En concordancia con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, la delegación mencionada se hará mediante la celebración de convenios suscritos entre el jefe del organismo o entidad pública nacional y el respectivo gobernador, en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria.

Los convenios suscritos para la delegación de funciones entre entidades públicas se regirán por las normas vigentes sobre convenios interadministrativos y tendrán un carácter temporal.

En tales convenios se especificarán los programas, proyectos y las actividades que se delegan, los recursos de todo orden necesarios para su ejecución, el estado de la delegación, los componentes técnicos y de acompañamiento a cargo de la entidad delegante, así como las fases y gradualidad de la misma.

Artículo 8º. *Regímenes especiales.* En el marco de la división político administrativa vigente, podrán conformarse regímenes especiales departamentales, de acuerdo con sus características geográficas, étnicas, ambientales y culturales.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

TÍTULO II

DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CAPÍTULO I

Organización y funcionamiento

Artículo 9º. *Asambleas Departamentales.* En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y estará integrada por no menos de once (11) ni más de treinta y un (31) miembros, que se denominarán diputados y tendrán la calidad de servidores públicos, sujetos al régimen que para estos efectos, fijan la Constitución y la ley.

Parágrafo. Las Asambleas Departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en la Ley 974 de 2005 y deberán ajustar sus reglamentos en lo establecido en tal disposición y en las normas que regulan el mismo principio.

Artículo 10. *Organización de las Asambleas.* La determinación de la estructura administrativa de las Asambleas Departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las

distintas categorías de empleo corresponden a la misma corporación, consultando las metas de ingresos y gastos, de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo, a la Ley 617 de 2000, o a las leyes que la modifiquen o sustituyan y las normas nacionales vigentes en materia salarial y prestacional.

Artículo 11. *Atribuciones.* Son funciones de las Asambleas Departamentales, además de las establecidas en el artículo 300 de la Constitución Política y la ley, las siguientes:

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y prestación de los servicios a cargo del Departamento.

2. Elaborar, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.

3. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico, social, el apoyo técnico y financiero de los municipios, en desarrollo de las competencias establecidas por la ley.

4. Adoptar de acuerdo con la ley, los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.

5. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.

6. Expedir el presupuesto anual de rentas y gastos de acuerdo con las respectivas normas orgánicas.

7. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear, suprimir y fusionar municipios y modificar sus límites mediante la segregación o agregación de territorios.

8. Aclarar las líneas limítrofes dudosas entre los municipios del mismo departamento, en los términos previstos en la Ley 1447 de 2011.

9. Reconocer la nueva cabecera municipal, en los casos en que los municipios en ejercicio de su autonomía dispongan el traslado de la misma; para lo cual solicitará que se convoque una consulta popular para

que sea la ciudadanía del municipio quien tome la decisión que luego oficialice la respectiva asamblea.

10. Crear y organizar provincias como entidades administrativas.

11. Determinar la estructura de la administración central del departamento mediante la creación de las dependencias que lo conforman y la asignación de sus funciones principales, las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleos; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta y entes universitarios autónomos y asignarles sus funciones básicas, a iniciativa del Gobernador.

12. Dictar normas de Policía en aquellas materias que no hayan sido reguladas por las autoridades nacionales y desarrollar las que estos hayan expedido, en cuanto fuere necesario.

13. Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales, en los períodos en que la asamblea no se encuentre sesionando.

14. Autorizar de manera general a los gobernadores para la celebración de todos los contratos tendientes a desarrollar los programas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo del departamento, en la ordenanza a través de la cual se imparta su aprobación a este último o en sus modificaciones.

15. Autorizar al gobernador de manera general para celebrar todos los contratos tendientes a ejecutar el gasto corriente en la ordenanza a través de la cual se imparta aprobación al presupuesto anual del departamento o en la que apruebe modificaciones al mismo.

16. Autorizar al Gobernador del departamento para celebrar los acuerdos o convenios con las entidades territoriales de los países limítrofes, dirigidos a la cooperación e integración para fomentar la preservación del medio ambiente, la defensa y fortalecimiento de la cultura y de la etnicidad, el desarrollo comunitario, la prestación de los servicios

públicos y la realización de obras de infraestructura y de desarrollo común, de conformidad con la Constitución y la ley.

17. Elegir su Mesa Directiva.

18. Posesionar al Gobernador del Departamento.

19. Recibir a Jefes de la administración de otros entes territoriales ajenos al Departamento, a Ministros del Despacho y/o a otras comisiones o personajes especiales que visiten el Departamento, cuando a la fecha de la visita se encuentre reunida en sesiones ordinarias o extraordinarias. En receso de la Asamblea, las funciones de protocolo, las cumplirá la Mesa Directiva o los Diputados en quienes esta delegue.

20. Elegir al Secretario de la Asamblea para el periodo previsto en la presente ley.

21. Elegir al Contralor General del Departamento, aceptar la renuncia, conceder licencias, y permisos. Al igual que aplicar las sanciones disciplinarias y penales y, por ende, llenar la vacancia del cargo.

22. Solicitar al Gobierno Central, Secretarios de Despacho, Gerentes de las entidades descentralizadas del orden Departamental y a la Contraloría General del Departamento, los informes que necesite.

23. Determinar la celebración de sesiones reservadas en los términos de la presente ley.

24. Recabar del Gobierno, la cooperación de los organismos de la Administración Pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.

25. Citar y requerir a los Secretarios del Despacho y demás funcionarios departamentales o del nivel descentralizado departamental, para que concurran a las sesiones, bajo las condiciones constitucionales y legales.

26. Exigir mediante comunicación escrita, informes sobre el ejercicio de sus funciones a los secretarios de despacho, jefes de departamentos administrativos, directores de institutos descentralizados del orden departamental y directores o gerentes de las empresas en las cuales, el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los Directores de las Corporaciones Autónomas

Regionales. Sobre aspectos puntuales de gestión, podrá solicitarle al gobernador y al contralor departamental informes escritos.

27. Solicitar informes y citar a los funcionarios del orden nacional, nombrados por el Gobernador del Departamento a efectos de hacer seguimiento a su función.

28. Dar aplicación al numeral 14 del artículo 4° del Acto Legislativo número 01 del 2007.

29. Vigilar la prestación de los servicios públicos en los municipios y citar a control especial, a los representantes legales, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en el respectivo departamento.

30. Dar cumplimiento a las sanciones aplicadas y comunicadas por los partidos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, por la inobservancia de sus miembros a directrices internas, siempre y cuando ello implique limitación de los derechos como Diputado, sanciones que pueden ir desde la pérdida del derecho al voto hasta la expulsión, siempre observando el debido proceso.

31. Promover la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.

32. Reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes que regulen la materia.

33. Autorícese por el término de un (1) año a las asambleas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, para que dentro de su respectiva jurisdicción creen municipios, sin el lleno de requisitos generales; siempre y cuando no hagan parte de ningún municipio y se encuentren ubicados en zonas de frontera.

34. Promover la participación ciudadana mediante la realización de audiencias públicas y especiales sobre temas de interés departamental.

35. Delegar en los concejos municipales sus funciones en materia de desarrollo económico y social, turismo, transporte, obras públicas, vías de

comunicación, desarrollo de las zonas de fronteras e infraestructura de telecomunicaciones, conforme al artículo 301 de la Constitución Política.

36. Aceptar la renuncia de los Diputados cuando la Corporación se encuentre sesionando. En receso, esta atribución corresponde al gobernador del departamento.

37. Ejercer las atribuciones que le confiera el Congreso de la República en desarrollo de los artículos 150 numeral 5 y 300 de la Constitución Política.

38. Crear juntas administradoras locales que cumplan determinadas funciones, para territorios que hagan parte de los corregimientos departamentales.

39. Aprobar la creación de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del orden departamental previstos en el artículo 300 numeral 7 de la Constitución Política, previo a la presentación y evaluación del estudio técnico que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.

40. Otras que les asignen nuevos actos legislativos, leyes, ordenanzas u otras normas jurídicas.

41. Crear mediante ordenanzas las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial, en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley 1454 de 2011.

42. Expedir el Código de Policía del departamento dentro del marco de l Código Nacional de Policía y los lineamientos de poder de policía señalados en las leyes nacionales.

Las ordenanzas que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador.

Artículo 12. *Prohibiciones de la Asamblea.* Se prohíbe a la Asamblea:

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones u ordenanzas, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

2. Aprobar mociones o actos de censura o de aplauso a la gestión o conducta de las autoridades y funcionarios públicos sin perjuicio del ejercicio de sus funciones de control político en las condiciones y términos establecidos en el presente estatuto.

3. Decretar a favor de Personas o Entidades, donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, u otras erogaciones o derechos que no estén reconocidos con arreglo a las leyes preexistentes.

4. Intervenir por medio de ordenanzas o resoluciones en asuntos que no sean de su competencia.

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra Personas Naturales o Jurídicas.

6. Adoptar régimen prestacional distinto al que ordena la ley.

Artículo 13. *Reconocimiento a personas naturales o jurídicas.* A los Diputados les está prohibido otorgar o realizar homenajes a personas naturales o jurídicas que no sean de reconocimiento general o público. La Mesa Directiva hará un estudio completo sobre las hojas de vida y logros en beneficio de la comunidad de cada una de las personas propuestas. Los postulados para dichos homenajes estarán sometidos a los requisitos establecidos en un reglamento especial que para estos efectos disponganla Mesa Directiva y la Comisión de Gobierno de la Corporación.

Artículo 14. *Prohibición para el manejo de cupos presupuestales.* Prohíbese a los diputados intervenir en beneficio propio o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la iniciativa en materia de gasto que se ejercerá únicamente con ocasión del debate al respectivo plan de desarrollo y del debate de la ordenanza o acuerdo anual de presupuesto, en la forma que establecen las leyes orgánicas del plan y del presupuesto.

Artículo 15. *Mesa Directiva.* La Mesa Directiva de las Asambleas Departamentales se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un periodo de un año.

Las minorías tendrán participación en la primera Vicepresidencia de las Asambleas, mediante la rotación entre los partidos o movimientos políticos que tengan representación en esta Corporación.

Ningún diputado podrá ser elegido más de una vez en la mesa directiva del mismo periodo constitucional, salvo las Asambleas compuestas por once miembros y aquellas en las que las minorías tengan tres miembros.

Artículo 16. *Representación legal.* La representación legal de la Asamblea, para efectos contractuales, judiciales y fiscales, corresponderá al Presidente de la Corporación, quien comparecerá personalmente o por medio de apoderados en los procesos en que esta sea parte, y se efectuará en los términos del régimen de contratación estatal y de la ley orgánica de presupuesto.

Artículo 17. *Comisiones.* Las Asambleas Departamentales integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir informe para primer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos o negocios que estas conozcan y el contenido de los proyectos, de acuerdo con su propio reglamento. Todo diputado deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrá pertenecer a dos o más comisiones permanentes. En todo caso habrá una comisión de planeación y otra de presupuesto. También se podrán crear libremente comisiones accidentales para tratar temas específicos.

Artículo 18. *Elección del Secretario General.* La Asamblea se reunirá y elegirá un Secretario General, cuyo periodo será de cuatro (4) años. Su elección requerirá mayoría calificada de los miembros de la Corporación y se realizará simultáneamente con la de la mesa directiva en el mes de enero del período legal respectivo.

En caso de falta absoluta se realizará nueva elección para el resto del periodo. Las ausencias temporales serán reglamentadas por la Asamblea Departamental. El Secretario presentará un informe anual a la Asamblea,

el cual se someterá a la Plenaria de la misma para su evaluación. Si el informe no es aprobado, podrá ser separado del cargo y se convocará a nueva elección para el resto del período.

Artículo 19. *Calidades del Secretario.* Para ser elegido Secretario General de la Asamblea se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores públicos. En todo caso, no podrá ser elegido quien haya perdido la investidura de un cargo de elección popular, se le haya revocado el mandato o haya sido sancionado disciplinariamente por falta grave o gravísima de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las demás normas que regulen, modifiquen o deroguen.

Artículo 20. *Posesión de los funcionarios elegidos por las Asambleas.* Los funcionarios elegidos por las Asambleas tendrán un plazo de quince (15) días calendario para su respectiva posesión. En los casos de fuerza mayor, este término se prorrogará por quince (15) días calendario. En el evento en que transcurrido este término, el funcionario elegido no se posesionare se entenderá que no ha aceptado el cargo y se procederá a una nueva elección del mismo.

Artículo 21. *Sede.* La Asamblea Departamental tendrá su sede en la capital del departamento, en el recinto oficialmente señalado para el efecto. Sin embargo, por motivos de seguridad o grave perturbación del orden público podrá trasladar su sede, sesionar en sitio diferente, por decisión motivada de más de las dos terceras partes de la corporación o a criterio del Gobernador, mientras subsistan las causas de la perturbación o amenaza, mientras subsistan las causas de perturbación o amenaza.

Artículo 22. *Reglamento.* Las Asambleas Departamentales expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual estarán incluidas, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la validez de las convocatorias y de las sesiones, y a la actuación de los diputados.

Los reglamentos se someterán a dos debates, el primero en la comisión respectiva y el segundo en la Plenaria.

Artículo 23. *Quórum*. Las Asambleas Departamentales y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros. Para decidir requieren la presencia de la mitad más uno de sus miembros y el voto favorable, igualmente de la mitad más uno de los diputados presentes, salvo que la Constitución o la ley exija un quórum o mayoría diferente.

Artículo 24. *Mayorías decisorias*. En las Asambleas Departamentales y sus Comisiones, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los asistentes, entendida como la mitad más uno de dichos votos.

Artículo 25. *Control político*. Las Asambleas Departamentales podrán citar y requerir a los Secretarios del Despacho, jefes de departamentos administrativos, directores de institutos descentralizados del orden nacional nombrados por el gobernador, departamental y directores o gerentes de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los directores de las corporaciones autónomas regionales dentro de la respectiva jurisdicción, para que concurran a sus sesiones.

Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de (5) cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios del Despacho del Gobernador no concurran, sin excusa aceptada por la asamblea, esta podrá proponer moción de censura.

Los citados deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.

Los diputados podrán, igualmente, solicitar informes a las entidades del nivel departamental sobre asuntos de su competencia. Estos informes deberán ser presentados en el término de cinco (5) días.

Parágrafo. La Asamblea impondrá moción de censura sobre los funcionarios del orden departamental y moción de observación sobre los del orden nacional.

Artículo 26. *Moción de censura.* La tercera parte de los miembros que componen la asamblea podrá proponer moción de censura respecto de los Secretarios de Despacho del Gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea.

La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

Artículo 27. *Citaciones.* La plenaria y las comisiones de la Asamblea podrán citar a las personas naturales o jurídicas que consideren necesarias dentro de los términos de la presente ley, para que en audiencia especial rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con asuntos de interés público.

Los citados podrán abstenerse de asistir solo por causa debidamente justificada.

La renuencia de los citados a comparecer o rendir las declaraciones requeridas será sancionada por las autoridades judiciales competentes, según las normas vigentes, para los casos de desacato a las autoridades.

CAPÍTULO II

Actuaciones

Artículo 28. *Período de sesiones.* Las Asambleas Departamentales sesionarán de manera ordinaria durante seis (6) meses así:

El primer año: el primer periodo se iniciará el día 2 de enero posterior a su elección, al último día de febrero; el segundo periodo desde el día 1º de abril al 31 de mayo y el tercer periodo desde el día 1º de octubre al 30 de noviembre.

El segundo, tercer y cuarto año: el primer periodo se iniciará el día 1º de marzo al 30 de abril y el segundo periodo desde el día 1º de junio al 31 de julio y el tercer periodo desde el día 1º de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, previa convocatoria del Gobernador, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Las sesiones extraordinarias que convoque el Gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes siempre y cuando no se exceda el límite establecido en este artículo.

Artículo 29. *Instalación.* Las sesiones de las Asambleas Departamentales serán instaladas y clausuradas públicamente por el Gobernador, sin que esta ceremonia sea esencial para que aquellas ejerzan legítimamente sus funciones.

Artículo 30. *Invalidez de las sesiones y decisiones.* Carecerá de validez toda reunión de miembros de las Asambleas que, con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe por fuera de las condiciones legales o reglamentarias vigentes. A los actos que se expidan en estas circunstancias no podrá dárseles efecto alguno y quienes participen en las deliberaciones incurrirán en causal de mala conducta.

Artículo 31. *Actas.* De las sesiones de las Asambleas y de sus Comisiones Permanentes se levantarán las correspondientes actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos; de los nombres de los diputados asistentes, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas.

Artículo 32. *Publicidad de las sesiones.* Las sesiones de las Asambleas serán públicas, con las limitaciones que establezca el reglamento que adopte la corporación. Para tal efecto podrán utilizarse todos los medios tecnológicos, disponibles para garantizar su amplia discusión.

Artículo 33. *Inasistencia.* La falta de asistencia de los diputados a las sesiones, sin excusa válida, no causará la remuneración y prestaciones

correspondientes. Ello, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.

CAPÍTULO III

De los Miembros de la Asamblea

Artículo 34. *De las Inhabilidades de los Diputados.* No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses

anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

6. No podrán ser inscritos como candidatos a las asambleas departamentales quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos que afecten el patrimonio del Estado, o por delitos que estén relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o con el narcotráfico, en este último caso mediante sentencia que se haya proferido en Colombia o en el exterior.

Artículo 35. *De las incompatibilidades de los diputados.* Los diputados no podrán:

1. Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como contratista con el respectivo departamento.

2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.

3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo

departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de este.

5. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.

Parágrafo. El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta.

Artículo 36. *Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados.* Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil de los diputados no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, o de sus entidades descentralizadas.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento que a él pertenezcan o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

Parágrafo 2°. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.

Artículo 37. *Excepciones.* Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:

1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés.

2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las mismas personas.

3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.

4. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

Artículo 38. *Duración.* Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.

Artículo 39. *Conflicto de intereses.* Cuando para los diputados exista interés directo en la decisión porque les afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberán declararse impedidos para participar en los debates o votaciones respectivas.

Las asambleas llevarán un registro de intereses privados en el cual los diputados consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún diputado, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella.

Para todos los efectos se aplicará lo dispuesto en el reglamento del Congreso de la República.

Artículo 40. *Faltas absolutas de los Diputados.*

1. La muerte.
2. La renuncia aceptada.
3. La incapacidad física permanente.
4. La pérdida de la investidura de Diputado de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política y demás disposiciones legales en la materia.
5. La declaratoria de nulidad de la elección como Diputado.
6. La interdicción judicial.

Artículo 41. *Incapacidad física permanente.* En caso de que por haberse declarado la incapacidad permanente de un Diputado mediante el procedimiento establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, este se vea impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal, se declarará la vacancia por falta absoluta del mismo.

Artículo 42. *Pérdida de la investidura.* La perderán los diputados en los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.

2. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor, dentro de los ocho (8) días siguientes a la instalación de la asamblea o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.

3. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 1°. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental, la autoridad que conozca de los hechos o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días.

Artículo 43. *Interdicción judicial.* Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un diputado, proferida por parte del juez competente, dicho diputado perderá su investidura como tal y el Presidente de la Asamblea tomará las medidas conducentes para hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Artículo 44. *Responsabilidad y causales generales de destitución.* A los diputados se les aplicará, en lo que corresponde el régimen disciplinario previsto en la Ley 13 de 1984 y en las normas que la reglamenten, adicionen o reformen.

Las causales de destitución contempladas en la misma regirán para los Diputados cuando su naturaleza les resulte aplicable.

Artículo 45. *Causales específicas de destitución.* También son causa les de destitución de los Diputados las siguientes:

1. La no incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones después del vencimiento de una licencia o suspensión, o de la cesación de las circunstancias que originaron una incapacidad legal o física transitoria.

2. El haberse proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o culposos.

3. La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 291 de la Constitución Política.

4. La inasistencia en un mismo periodo de sesiones a cinco (5) sesiones plenarias en las que se voten proyectos de ordenanzas, sin que medie causa justificada o fuerza mayor.

Artículo 46. *Aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión.* La aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión a un diputado será solicitada por la Procuraduría General de la Nación al Gobernador, quien procederá a su imposición y remitirá al Presidente de la Asamblea los documentos pertinentes para hacerla efectiva.

Artículo 47. *Formas de llenar las faltas absolutas.* Las faltas absolutas de los diputados serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente.

El Presidente de la asamblea llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación, a tomar posesión del cargo vacante.

Artículo 48. *Silla vacía.* No podrán ser reemplazados los diputados a los que se les dicte orden de captura dentro del proceso penal al que fueren vinculados por los delitos referidos en el inciso 6° del artículo 42 de la presente ley. La sentencia condenatoria que se profiera en estos casos produce la pérdida definitiva de la curul para el partido, movimiento

político o grupo significativo de ciudadanos que avaló el candidato. También quedará vacía cuando este se hubiese inscrito por firmas.

Parágrafo. Las renunciaciones que presenten los diputados a los que se les haya vinculado penalmente a un proceso penal por los delitos enumerados en el inciso 6° del artículo 42 de la presente ley no producen como efecto el ingreso de quien corresponda en la respectiva lista.

Artículo 49. *Reducción del quórum.* Cuando las faltas absolutas de los diputados no pudieren ser reemplazadas conforme a lo dispuesto en esta ley, el quórum, para todos los efectos a que hubiere lugar, se determinará teniendo como base el total de miembros de la asamblea menos el número de curules que no pudieron ser suplidas.

Artículo 50. *Faltas temporales.* De conformidad con lo establecido en el Acto legislativo número 01 de 2009, que reformó el artículo 134 de la Constitución Política, son faltas temporales de los diputados:

1. La licencia de maternidad.
2. La incapacidad física transitoria.
3. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario.
4. La suspensión provisional de la elección dispuesta por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Artículo 51. *Licencia.* Los diputados podrán solicitar ante la Mesa Directiva Licencia Temporal no Remunerada en el ejercicio de sus funciones, que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) meses.

En caso de ser concedida la Licencia Temporal, el Presidente de la Corporación no permitirá que ingresen a la asamblea o se posesionen a título de reemplazo candidatos no elegidos, salvo en el caso de las mujeres que hagan uso de la licencia de maternidad.

Artículo 52. En lo relacionado con las comisiones de estudio de los Diputados, la mesa directiva de la Corporación aplicará lo previsto para los funcionarios públicos.

Artículo 53. *Incapacidad física transitoria.* En caso de que por motivos de salud debidamente avalados por la entidad prestadora de servicios de salud a la que estén afiliados los diputados estos se vean impedidos

para asistir transitoriamente a las sesiones de la misma, el Presidente de la corporación declarará la vacancia temporal.

Artículo 54. *Ausencia forzada e involuntaria.* Cuando un Diputado no pueda concurrir a las sesiones de la asamblea por retención forzada, el Presidente de la Corporación declarará la vacancia temporal en el momento de conocer del hecho.

Artículo 55. *Suspensión provisional de la elección.* Una vez que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un diputado, el Presidente de la Asamblea declarará la vacancia temporal y dispondrá las medidas conducentes para hacer efectiva la cesación de funciones del mismo, durante el mismo tiempo de suspensión.

Artículo 56. *Derechos de los reemplazos por vacancia.* Quienes sean llamados a ocupar la dignidad de diputado para suplir faltas absolutas o temporales tendrán los derechos y obligaciones previstos en la presente ley desde el momento de su posesión y mientras concluya el periodo correspondiente o la vacante.

Artículo 57. En época de sesiones, corresponde a la Asamblea oír y decidir las renunciaciones, las excusas de sus miembros y concederles licencias cuando las necesiten y tengan a bien otorgarlas.

Parágrafo. En los casos de renuncia o licencia se puede proponer por cualquier diputado la alteración de Orden del Día para considerar la respectiva solicitud y, luego que se haya alterado el Orden del Día, se procederá a decidir.

Artículo 58. Son excusas de los diputados para no asistir a las sesiones:

1. Incapacidad física o enfermedad debidamente comprobada.
2. Grave calamidad doméstica.
3. Tratándose de sesiones extraordinarias, la falta de citación o aviso.
4. El cumplimiento de comisiones asignadas por la corporación o por el Gobierno.
5. El caso fortuito y la fuerza mayor.

Parágrafo. La inasistencia o retiros injustificados de las sesiones o de las comisiones sin causa debidamente justificada cuando se estén discutiendo proyectos de ordenanza serán sancionados con el descuento de la remuneración a que tiene derecho por la respectiva sesión.

El Presidente de la Corporación o en su defecto el secretario informará al funcionario pagador sobre los diputados ausentistas para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

En los casos de falta temporal, se exigirá excusa escrita del diputado.

Artículo 59. *Sanciones por irrespeto.* Al Diputado que faltare al respeto debido a la corporación o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros le será impuesta por el Presidente, según la gravedad de la falta, algunas de las sanciones siguientes:

1. Llamamiento al orden.
2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.
3. Suspensión en el ejercicio de la palabra.
4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión.

5. Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y hasta por un (1) mes, previo concepto favorable de la corporación.

Artículo 60. *Responsabilidad y disciplina política.* Los diputados son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Los diputados elegidos con el aval de partidos o movimientos políticos tendrán las obligaciones y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que prevean los estatutos de estos, todo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución y la ley.

Artículo 61. *Régimen de seguridad social y prestacional de los Diputados.* El régimen de seguridad social y prestacional de los diputados es inherente a su naturaleza y estará a cargo del presupuesto de las asambleas departamentales.

Artículo 62. *Remuneración de los Diputados.* Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, la remuneración de los diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente tabla:

< td width="49%" valign=top style='width:49.98%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;height:3.0pt'>

Cuarta

Categoría de departamento	Remuneración de diputado
Especial	30 smlm
Primera	26 smlm
Segunda	25 smlm
Tercera	24 smlm
20 smlm	

Parágrafo. Todo diputado tendrá a su disposición, para el logro de una eficiente labor en la asamblea departamental, una unidad técnica de trabajo, integrada por no más de siete personas. Para la provisión de estos cargos el diputado postulará ante la mesa directiva o ante quien este delegue, los candidatos para su contratación. Dicha unidad contará con un tope máximo de salarios mínimos mensuales vigentes que no superará el salario del diputado.

Artículo 63. *Régimen prestacional de los diputados.* Los diputados y quienes suplieren las faltas absolutas o temporales de estos tendrán derecho a percibir las siguientes prestaciones sociales **básicas**:

1. Auxilio de Cesantía.
2. Intereses sobre las cesantías.
3. Prima de Navidad (de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4ª de 1966).

De acuerdo con su capacidad fiscal, cada departamento podrá pagar las prestaciones sociales sin exceder los topes de la Ley 617 de 2000 para efectos del cómputo sobre gastos de funcionamiento.

Parágrafo 1º. La remuneración del auxilio de cesantías de los diputados deberá liquidarse a razón de una asignación mensual por cada año calendario de sesiones. Para los cálculos anteriores, deberá entenderse como si se hubiere sesionado los doce meses del respectivo año y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, conforme a lo estipulado en los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excepto cuando mediare renuncia o desvinculación, caso en el cual el factor anterior se liquidará proporcionalmente.

Parágrafo 2º. Los diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones complementarias en la materia. En todo caso se les garantizará aseguramiento para la salud, pensiones y riesgos profesionales.

El presente régimen se someterá a lo dispuesto en la Constitución para los diputados en su condición de servidores públicos.

Artículo 64. *Bancadas*. Las Asambleas Departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en la Ley 974 de 2005 y deberán ajustar sus reglamentos en lo establecido en tal disposición y en las normas que regulan el mismo principio.

Los miembros de la Corporación elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva Corporación.

Cada miembro de una Corporación Pública pertenecerá exclusivamente a una Bancada.

Parágrafo. Las bancadas elegirán un vocero general, quien los representará en las diferentes actividades de la corporación y en la plenaria; los voceros de las bancadas serán elegidos de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido y movimiento político y el partido notificará de manera oficial al Presidente de la corporación.

Artículo 65. *Actuación en bancadas*. Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las Corporaciones en

todos los temas que los Estatutos del Respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia.

Parágrafo. Las bancadas elegirán un vocero general, quien los representará en las diferentes actividades de la corporación y en la plenaria; los voceros de las bancadas serán elegidos de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido y movimiento político y el partido notificará de manera oficial al Presidente de la corporación.

Artículo 66. *Decisiones*. Cuando la bancada decida frente a un tema dejar en libertad a sus miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, se dejará constancia de ello en el acta de la respectiva reunión.

CAPÍTULO IV

Del trámite de las ordenanzas

Artículo 67. *Iniciativa*. Pueden presentar proyectos de ordenanza ante la secretaría general de la asamblea el Gobernador, por conducto de sus secretarios, los diputados y en materias relacionadas con sus atribuciones los contralores. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente.

Artículo 68. *Unidad temática*. Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con el mismo. El presidente de la asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma asamblea.

Artículo 69. *Trámite y debates*. Los proyectos de ordenanza serán presentados en la secretaría general de la asamblea, la cual los repartirá a las comisiones que deban ocuparse de ellos, según la materia que traten y la competencia de aquellas.

Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días. El primero lo dará la comisión respectiva y el segundo, la asamblea en sesión plenaria. Durante el primero y el segundo se le pueden introducir los cambios, reformas, supresiones o adiciones que se consideren convenientes, siempre que se refieran a la materia o asunto que trate el proyecto.

El ponente o ponentes para el primero será designado por el presidente de la comisión respectiva y para el segundo, por el Presidente de la Plenaria.

Los informes de los ponentes serán rendidos dentro de los ocho, cinco días calendario siguientes a su designación, según se trate del primero, segundo debates. El incumplimiento de estos términos constituye causal de mala conducta.

El ponente o ponentes para los dos debates pueden ser los mismos o diferentes diputados.

Artículo 70. *Publicación.* El proyecto y los informes de los ponentes serán publicados en la gaceta oficial del departamento o de la asamblea o en la página web de aquel o de esta. Mientras dicha publicación no se haya realizado no se podrá dar el debate respectivo. Si la publicación tuvo lugar en la página web, el debate correspondiente solo podrá tener lugar veinticuatro (24) horas después de que aquella haya sido efectuada.

Artículo 71. *Archivo.* Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en dos debates deberán ser archivados al término de las correspondientes sesiones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 72. *Objeciones.* Aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea, pasará al Gobernador para su sanción, y si este no lo objetare por motivos de inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la asamblea.

El Gobernador dispondrá del término de cuatro (4) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos, de seis (6) días cuando el proyecto contenga de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos, y hasta de diez (10) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).

Si el Gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto o con objeciones, deberá sancionarlo y promulgarlo. Si la asamblea se pusiere en receso dentro de dichos términos, el Gobernador tendrá el deber de publicar el proyecto

sancionado y objetado, dentro de aquellos plazos. En el nuevo período de sesiones la asamblea decidirá sobre las objeciones.

Artículo 73. *Sanción.* El Gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea.

Artículo 74. *Trámite en el Tribunal.* Si las objeciones fueren por ilegalidad o inconstitucionalidad y la asamblea insiste, el proyecto pasará al tribunal administrativo que tenga sede en la capital del departamento para que este decida definitivamente sobre su exequibilidad conforme a las reglas del Código de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 75. *Publicación y vigencia.* Sancionada la ordenanza se publicará en la gaceta o boletín oficial del departamento y empezará a regir cuando la misma determine, en ningún caso antes de la promulgación aquí ordenada.

Artículo 76. *Normas especiales.* Las disposiciones sobre reforma y derogatoria de las leyes se aplican a las ordenanzas.

Artículo 77. *Nulidad.* Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se aplicará lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

Las ordenanzas u otros actos de las asambleas departamentales anulados por los tribunales de lo contencioso administrativo por ser contrarios a la Constitución o a las leyes no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las asambleas para ocuparse de tales asuntos.

TÍTULO III

DE LOS GOBERNADORES

Artículo 78. *Naturaleza del cargo.* Además de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución Política, el Gobernador es la primera autoridad de policía del departamento.

Artículo 79. *Elección de Gobernadores.* Los gobernadores son elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro años el día que la

Constitución y la ley determinen y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente.

En la elección del gobernador de Cundinamarca no participan los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá, Distrito Capital.

Artículo 80. *De las inhabilidades de los gobernadores.* No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, salvo aquellos que afecten el patrimonio del Estado, haya perdido la investidura de congresista, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión, haya sido objeto de sanción consistente en destitución del empleo público o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.

6. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en el respectivo departamento durante un período de doce (12) meses antes de la elección de gobernador.

7. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución Nacional.

8. A quien se le hubiere revocado el mandato como gobernador o alcalde.

9. Quien hubiere sido elegido para cargo o corporación pública de elección popular cuyo período coincida en el tiempo, así sea parcialmente, con el período del cargo de gobernador.

10. No podrán ser inscritos como candidatos a las gobernaciones departamentales quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos que afecten el patrimonio del Estado, o por delitos que estén relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o con el narcotráfico, en este último caso mediante sentencia que se haya proferido en Colombia o en el exterior.

Artículo 81. *De las incompatibilidades de los gobernadores.* Los gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo, no podrán:

1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo.

2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la Administración Pública.

4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas.

5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.

6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.

7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido y tampoco podrá hacerlo a partir de la finalización de dicho periodo y por el mismo término.

Artículo 82. Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1 y 4 tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por veinticuatro (24) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia.

En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término será igual al del periodo para el cual fueron elegidos y por el mismo término a partir de la finalización de este.

Quien fuere designado como Gobernador por más de seis (6) meses quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.

Artículo 83. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizado del correspondiente departamento, ni miembros de juntas

directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento o de sus entidades descentralizadas.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

Parágrafo 2°. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.

Parágrafo 3°. La entidad contratante adoptará las medidas correctivas para tal efecto.

Artículo 84. *Efectos.* Las actuaciones, decisiones y contratos que se realicen o celebren contraviniendo lo dispuesto en la Constitución y en las leyes serán anulables. Cualquier persona o el Ministerio Público podrán solicitar la declaratoria de nulidad ante la jurisdicción competente.

Artículo 85. *Excepciones a las incompatibilidades.* Las incompatibilidades y prohibiciones de que tratan los artículos anteriores no obstan para que los gobernadores, sus parientes, cónyuges o compañeros permanentes y sociedades mencionadas puedan directamente o por intermedio de apoderados

1. Actuar en las diligencias administrativas o jurisdiccionales en las cuales tengan interés personal.

2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que los graven.

3. Usar los bienes o servicios que para tal efecto las entidades públicas de cualquier naturaleza o nivel administrativo ofrezcan bajo condiciones comunes a todos los usuarios.

Artículo 86. *Designación de gobernador en caso de falta absoluta o suspensión.* Siempre que se presente falta absoluta o suspensión a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un Gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.

El gobernador designado, según el caso, deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del gobernador elegido por voto popular. El gobernador encargado o designado quedará sujeto a la ley estatutaria que regula el voto programático.

En caso de faltas absolutas de gobernadores, el Presidente de la República solicitará al partido o, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato.

No podrán ser encargados o designados como gobernadores para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

Artículo 87. *Convocatoria a elección por falta absoluta.* En caso de falta absoluta del gobernador se convocará a nuevas elecciones. La nueva elección deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) meses siguientes a dicha falta, mediante convocatoria que se hará en el mismo decreto por el cual se designe gobernador encargado.

El candidato a nuevo gobernador deberá inscribir su candidatura treinta (30) días antes de la elección, y anexar en ese mismo acto el programa de gobierno que someterá a consideración de la ciudadanía.

Parágrafo. En tal evento, el término de posesión se causará una vez sea expedida la credencial respectiva.

Artículo 88. *Residencia del gobernador y autorización para salir del país.* La residencia habitual del Gobernador será la Capital del Departamento. Cuando requiera salir del País en misión oficial, lo hará con autorización previa del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior. Cuando se ausente dejará encargado de sus funciones a uno de los secretarios de despacho e informará de ello al Ministerio del Interior.

Parágrafo. Los gobernadores de los departamentos ubicados en zonas de frontera podrán hacer tránsito en misión oficial en zonas de frontera con países limítrofes cuando el término no exceda las 48 horas. En todo caso, deberán reportar al Ministerio del Interior y a la respectiva Asamblea departamental el alcance y objeto de la comisión.

Artículo 89. *Permisos, licencias y vacaciones.* La renuncia del Gobernador, la licencia o el permiso para separarse transitoriamente del cargo la aceptará o concederá el Presidente de la República. Las incapacidades médicas serán certificadas por la entidad prestadora de salud o en su defecto por el médico legista u oficial del lugar. Durante el término de las anteriores situaciones el Gobernador deberá encargarse de las funciones de su despacho a uno de sus Secretarios.

La concesión de vacaciones las decreta el mismo Gobernador, con indicación del periodo de causación, iniciación y finalización y las sumas a que tiene derecho. Durante el término de su disfrute el Gobernador deberá encargarse a un Secretario de las funciones de su Despacho.

Artículo 90. *Calidades.* Para ser elegido o designado Gobernador se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o haber residido en el respectivo departamento durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la inscripción, o durante un periodo mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

Parágrafo. Para ser elegido Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se requiere, además de las calidades establecidas por la ley, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha de la elección.

Artículo 91. *Posesión, término y aplazamiento.* Los gobernadores se posesionan ante la respectiva asamblea. Si no estuviere reunida, lo harán ante el correspondiente tribunal de lo contencioso administrativo o su presidente. Si lo anterior no fuere posible, ante cualquier funcionario que ejerza autoridad o jurisdicción o ante dos testigos.

Los Gobernadores se posesionarán el 1º de enero del año en que comience el periodo para el cual han sido elegidos.

El Presidente de la República podrá aplazar la posesión del Gobernador hasta por un (1) mes, en caso de fuerza mayor o caso fortuito. La prórroga se contará a partir de la fecha en que debe efectuarse la posesión. En este evento se proveerá la Gobernación por encargo, en los términos de esta ley.

La no posesión del Gobernador elegido popularmente dentro del término legal, sin que medie justa causa, dará lugar a falta absoluta y el Presidente de la República proveerá el cargo en los términos de esta ley.

Si la falta de posesión se predica de Gobernador encargado, el Presidente de la República designará otra persona en este cargo.

Los Gobernadores deberán declarar bajo la gravedad del juramento el monto de sus bienes y rentas. Así mismo están en la obligación de presentar su hoja de vida en los términos y condiciones que fije la Ley 190 de 1995 o disposiciones que la modifiquen o sustituyan. Tales documentos deberán ser conservados por la unidad de recursos humanos de la gobernación.

Artículo 92. *Impedimentos y recusaciones.* De los impedimentos y recusaciones de los Gobernadores conocerá el Presidente de la República por conducto del Ministerio del Interior. Si fuere procedente se

designará un gobernador ad hoc. Para estos fines se dará aplicación, en lo pertinente, a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y a las causales de recusación establecidas para los Jueces en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 93. *Salarios y prestaciones de los gobernadores.* Los Gobernadores tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos, a la asignación correspondiente a la categoría que para el departamento expida el Gobierno Nacional y el régimen prestacional existente para los servidores públicos en cada departamento de conformidad con la ley.

Artículo 94. *Atribuciones de los gobernadores.* Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los Gobernadores tendrán las siguientes, relacionadas con la Nación, con la asamblea, con la administración departamental, con los municipios, con los habitantes de su territorio y con el orden público:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los decretos del Gobierno Nacional, las ordenanzas de la respectiva asamblea y sus propias decisiones.

2. Gestionar y promover la adopción y ejecución de políticas nacionales que coadyuven los intereses departamentales.

3. Coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales de carácter sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.

4. Atender las instrucciones del Presidente de la República sobre la ejecución de la política macroeconómica y las relacionadas con los convenios celebrados entre la nación y el departamento.

5. Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.

6. Presentar informes al Gobierno Nacional con la periodicidad que este determine, sobre la marcha de la administración departamental en materia de desarrollo económico y de programas sectoriales que hayan convenido por acuerdos interadministrativos.

7. Presentar los proyectos de ordenanza que juzguen convenientes para la buena marcha del departamento.

8. Presentar a la asamblea al inicio de sus sesiones, un informe sobre la administración a su cargo y las reformas que deben introducirse.

9. Reglamentar las ordenanzas departamentales.

10. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los diputados cuando la asamblea departamental esté en receso.

11. Aceptar la renuncia del contralor cuando la asamblea se encuentre en receso.

12. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios departamentales de acuerdo con las facultades y autorizaciones establecidas en la Constitución, la ley y las ordenanzas departamentales.

13. Velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos departamentales y nacionales que ejerzan sus funciones en el Departamento y dictar los actos necesarios para su administración.

14. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los servidores bajo su dependencia.

15. Conceder licencias y aceptar renunciaciones a los funcionarios y miembros de las juntas, asambleas y demás organismos cuyos nombramientos correspondan a la asamblea, cuando esta no se encuentra reunida y nombrar interinamente a quien debe reemplazarlo, salvo norma expresa que disponga lo contrario.

16. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del departamento.

17. Conceder comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción del nivel nacional, departamental y municipal a los funcionarios inscritos en Carrera Administrativa del Nivel Central.

18. Adelantar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y pleno empleo de los habitantes del departamento.

19. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica entre los habitantes del departamento, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones departamentales en el marco de la Constitución y la ley.

20. Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de sus municipios y de las vías para la competitividad.

21. Complementar la actuación municipal en la actualización catastral de predios rurales en municipios con gran extensión y en coordinación con las autoridades competentes en la materia garantizando la autonomía fiscal municipal y la titularidad del impuesto de los municipios.

22. Velar por el medio ambiente sano y el desarrollo sostenible, en concurrencia con las entidades que determine la ley.

23. Ejecutar acciones tendientes a la protección de la población vulnerable y a su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.

24. Desarrollar acciones tendientes a prestar apoyo, asesoría, capacitación y asistencia técnica a los distritos, municipios, resguardos indígenas y cuando se conformen a las entidades territoriales indígenas de su jurisdicción.

25. Promover, desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los asuntos sectoriales del nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer recomendaciones al Gobierno Nacional sobre su ejecución en el ámbito de su competencia.

26. Ejercer la intermediación y coordinación entre las autoridades locales y las nacionales, con el apoyo del Sistema Administrativo del Interior.

27. Presidir las Juntas Departamentales de Coordinación Municipal.
28. Suspender o destituir y nombrar a los alcaldes de su departamento en los casos señalados por la ley.
29. Designar alcalde ad hoc para ejercer funciones administrativas de policía en caso de litigio o duda sobre la competencia por el término que persista el diferendo.
30. Coordinar la acción de los municipios sin perjuicio de su autonomía y servir de interlocutor de los mismos ante el Gobierno Nacional.
31. Fomentar la constitución de asociaciones de municipios y otras figuras de integración territorial en su jurisdicción.
32. Rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía para lo cual deberá definir un esquema y cronograma de seguimiento y evaluación de resultados facilitará los escenarios de control social a su administración y convocará de manera periódica a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para escuchar sus propuestas o críticas, de acuerdo con las directrices señaladas para tal efecto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y la política de rendición de cuentas contenida en el documento CONPES 3654.
33. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del departamento a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.
34. Velar por la efectividad de la participación ciudadana en relación con la asamblea departamental.
35. Promocionar, difundir y proteger los derechos humanos en su jurisdicción, en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia; ejecutando para ello las políticas, campañas y convenios sobre derechos, deberes y mecanismos de protección de los mismos, con la participación de otras entidades estatales y de las organizaciones no gubernamentales.
36. Velar por el mantenimiento del orden público en el departamento, de acuerdo con las normas y las instrucciones del Presidente de la

República, y coadyuvar a su mantenimiento en el resto del territorio nacional.

37. Presidir el Consejo de Seguridad Departamental. Esta función solo se podrá delegar en el Secretario de gobierno o quien haga sus veces.

38. En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público, ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al gobernador del respectivo departamento determinar el lugar donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su municipio.

39. Impartir instrucciones a los comandantes de la fuerza pública para prevenir desórdenes y alteración del orden público. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el gobernador.

40. Solicitar a los alcaldes y a las autoridades de las demás entidades territoriales ubicadas en el departamento la expedición de las órdenes y medidas de orden público que se requieran para su conservación o restablecimiento en esas entidades territoriales.

41. Elaborar los informes generales y especiales de orden público, de conformidad con la Ley 4ª de 1991 y remitirlos oportunamente al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio del Interior.

42. Dictar dentro del área de su competencia los reglamentos de policía necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, de conformidad con la ley.

43. Requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos permitidos por la Constitución y la ley.

44. Diseñar programas de convivencia pacífica y de construcción de la paz en su jurisdicción.

45. Proponer la adopción de políticas específicas en materia de prevención criminal, que se adecuen a las características del departamento en coordinación con las entidades nacionales competentes.

46. Dentro de los precisos límites de las competencias que a ellos les corresponden, convenir con las autoridades de las entidades territoriales de igual nivel del país vecino, programas de cooperación e integración fronteriza, dirigidos a fomentar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la preservación del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.

47. Apoyar a las entidades territoriales en su territorio para que den cumplimiento a las normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos, en coordinación con el Gobierno Nacional en la búsqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit o de incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.

48. Presentar a la asamblea un informe anual sobre la viabilidad fiscal de los municipios, en el cual deberá relacionar aquellas entidades que hayan incumplido los límites legales al gasto dispuesto en los artículos 6° y 10 de la Ley 617 de 2000 y los consagrados en las normas de disciplina y/o responsabilidad fiscal vigentes. Tal informe deberá presentarse en el primer día de sesiones ordinarias correspondientes al segundo periodo de cada año.

49. Previo a la presentación del proyecto de ordenanza por el cual se cree una entidad descentralizada, presentar a consideración de la asamblea un estudio técnico avalado por el organismo oficial correspondiente, que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.

50. Evaluar anualmente el desempeño y gestión del Comandante de Policía de su jurisdicción, en cumplimiento de las metas previstas en el plan integral de seguridad de su departamento.

51. Incorporar directamente en el decreto de presupuesto de su departamento los recursos provenientes de adiciones del presupuesto

nacional o los recursos destinados específicamente a seguridad, mitigación del riesgo medioambiental.

52. Regular y unificar las tarifas de transporte de servicio público intermunicipal y así como el uso de las rutas en las vías intermunicipales.

53. Las demás que les señalen la Constitución y la ley.

Parágrafo. El gobernador es agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público. En consecuencia, los actos y órdenes del Presidente de la República en esta materia los aplicará en el departamento de manera inmediata y preferente. A su vez, las decisiones de los gobernadores en materia de orden público son preferentes a las de los alcaldes.

Artículo 95. *Prohibiciones.* Les está prohibido a los gobernadores:

1. Decretar en favor de cualquier persona o entidad auxilios, gratificaciones, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, las ordenanzas y las decisiones jurisdiccionales.

2. Decretar por motivos políticos actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar insubsistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión o fusión de entidades departamentales, en desarrollo de lo previsto en el numeral 8 del artículo 305 de la Constitución.

Artículo 96. *Faltas absolutas.* Son faltas absolutas del gobernador:

1. La muerte.
2. La renuncia debidamente aceptada.
3. La declaratoria de nulidad de la elección.
4. La destitución.
5. La declaración de vacancia por abandono del cargo.
6. La interdicción judicial.
7. La incapacidad física permanente.
8. La revocatoria del mandato.

9. La no posesión dentro del término legal, sin justa causa.

10. Abandono de cargo.

Artículo 97. *Faltas temporales*. Son faltas temporales del gobernador:

1. Los permisos para separarse del cargo.

2. Las licencias.

3. Las comisiones de servicio.

4. La incapacidad física transitoria.

5. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal.

6. La ausencia forzada e involuntaria.

7. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción contencioso- administrativa.

8. Vacaciones.

Artículo 98. *Renuncia*. La renuncia al cargo de gobernador se hará ante el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior, de manera escrita donde se indique inequívoca y espontáneamente la voluntad de renunciar. Para tal fin el Presidente de la República, tendrá un término de treinta (30) días para aceptar dicha solicitud, prorrogables hasta por treinta (30) días más, por razones de orden público o necesidades del servicio.

Parágrafo. Vencidos los plazos anteriores sin que medie una decisión de fondo, el gobernador podrá retirarse del cargo, sin que constituya abandono del mismo, designando su reemplazo temporal en tanto se proceda a suplir las faltas absolutas de conformidad con la ley.

Artículo 99. *Declaración de nulidad de la elección*. Una vez quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un gobernador por parte de la jurisdicción contencioso- administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal, y el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para hacer efectiva dicha decisión.

Artículo 100. *Destitución.* La Procuraduría General de la Nación decretará la destitución conforme a la Ley 734 de 2002, en cuyo caso su ejecución corresponderá al Gobierno Nacional.

Cuando se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriada, aun cuando en su favor se decrete cualquier beneficio, el Presidente de la República procederá a ejecutar la destitución a los gobernadores. Se exceptúan los casos por delitos políticos y/o culposos que no hayan afectado el patrimonio del Estado.

Así mismo, será procedente la destitución en los eventos previstos en la Ley 782 de 2002 y demás normas vigentes.

Artículo 101. *Abandono del cargo.* Se produce abandono del cargo cuando el gobernador, sin justa causa

1. No reasume sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física transitoria inferior a ciento ochenta (180) días.

2. Abandona el territorio de su jurisdicción sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos.

3. No se reintegra a sus actividades una vez haya concluido el término de suspensión del cargo.

El abandono del cargo constituye falta disciplinaria y se investigará por la Procuraduría General de la Nación de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano.

Artículo 102. *Interdicción judicial.* Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un gobernador proferida por parte del juez competente, se producirá la vacancia por falta absoluta y el Presidente de la República tomará las medidas conducentes para hacer efectivo el cese de funciones del mismo, a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Artículo 103. *La revocatoria del mandato.* La revocatoria del mandato se producirá de conformidad con las leyes estatutarias que rijan sobre el particular.

Artículo 104. *Concesión de vacaciones.* La concesión de vacaciones las decreta el mismo gobernador, por indicación del período de causación, el término de las mismas, las sumas a que tiene derecho por este concepto, su iniciación y finalización, así como su reemplazo, debiendo comunicar previamente lo anterior al Ministerio del Interior.

Artículo 105. *Permisos y licencias.* Los permisos remunerados a los gobernadores para separarse transitoriamente del cargo serán hasta de tres (3) días, y las licencias no remuneradas hasta por sesenta (60) días prorrogables hasta por otros treinta (30). Estos se concederán por el Ministerio del Interior cuando medie justa causa.

Artículo 106. *Comisiones de servicio.* Las comisiones oficiales dentro y fuera del país de los gobernadores serán ordenadas por ellos mismos, indicando su duración, objeto, costo para la gobernación y la designación del Secretario de despacho que lo remplazará.

Las comisiones se decretarán para atender asuntos oficiales relacionados directamente con los intereses departamentales.

El término de duración será el estrictamente necesario para atender el asunto respectivo.

Artículo 107. *Informe sobre comisiones al exterior.* El gobernador presentará un informe a la Asamblea dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al término de la comisión al exterior, indicando el motivo, duración, costos para el presupuesto del departamento y resultados de la gestión.

Si la asamblea no se encuentra reunida, lo hará en la primera sesión ordinaria, dentro del mismo término.

Artículo 108. *Duración de las comisiones.* Las comisiones dentro del país no serán superiores a diez (10) días hábiles y al exterior a veinte (20) días hábiles. Estos términos podrán prorrogarse por una sola vez y por el mismo tiempo y de ello se presentará el informe correspondiente ante la asamblea.

Artículo 109. *Incapacidades médicas.* Las incapacidades médicas del gobernador serán certificadas por la empresa promotora de salud a la cual esté afiliado.

Producida la incapacidad, el gobernador informará de ella al Gobierno Nacional, indicando el nombre de la persona que lo reemplazará.

Artículo 110. *Incapacidad física permanente.* En caso de que por haberse declarado la incapacidad permanente del Gobernador de un Departamento, mediante el procedimiento establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, este se vea impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal, se declarará la vacancia por falta absoluta del mismo.

Artículo 111. *Causales de suspensión de los gobernadores.* El Presidente de la República, previa solicitud oficial de autoridad jurisdiccional competente, suspenderá a los gobernadores en los siguientes casos:

1. Por haberse dictado en su contra resolución de acusación debidamente ejecutoriada, salvo por delitos culposos, excepto cuando se hubiere afectado el patrimonio del Estado.

2. Por haberse dictado en su contra, por autoridad judicial competente, medida de aseguramiento debidamente ejecutoriada.

3. Igualmente, procederá la suspensión en los casos previstos en la Ley 418 de 1997 o en la norma que la modifique o sustituya, mientras dure su vigencia.

4. Cuando la Contraloría General de la República solicite la suspensión provisional, de conformidad con el numeral 8 del artículo 268 de la Constitución.

5. Cuando la Procuraduría General de la Nación imponga como medida preventiva o como sanción disciplinaria la suspensión en el ejercicio del cargo. La ejecución de dicha sanción corresponderá al Presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 o en las demás normas que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo. Mientras un gobernador permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo de que es titular.

Si dentro de los respectivos procesos no es encontrado responsable, tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor, en la medida en que la sanción fuere inferior al tiempo de suspensión.

Artículo 112. *Suspensión provisional de la elección.* Una vez que la jurisdicción contencioso administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un gobernador, el Gobierno Nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, procederá a tomar las medidas conducentes a hacer efectiva la cesación de funciones del mismo durante el tiempo de suspensión, y designará su reemplazo.

Artículo 113. *Ausencia forzada e involuntaria.* Cuando un gobernador no pueda concurrir a desempeñar sus funciones por motivos ajenos a su voluntad, el Gobierno Nacional declarará la vacancia temporal tan pronto tenga conocimiento del hecho, y designará a quien deba reemplazarlo.

Durante este término, el gobernador tendrá derecho a su remuneración y a los regímenes de prestaciones sociales y seguridad social.

TÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRATIVA

Artículo 114. *Gobierno departamental.* El gobernador, con los secretarios de despacho, los jefes de departamentos administrativos y los jefes o directores de las entidades descentralizadas constituyen el gobierno departamental.

Los decretos que expida el gobernador serán suscritos por el secretario o jefe del departamento administrativo del respectivo ramo, con excepción del decreto de nombramiento y remoción de secretarios del despacho y jefes de departamentos administrativos, los cuales solamente serán suscritos por el gobernador.

Como jefe de la administración departamental, el gobernador ejerce sus atribuciones por medio de la administración central o descentralizada.

Artículo 115. *Estructura administrativa.* Los departamentos definirán su estructura administrativa en forma flexible, considerando los lineamientos establecidos en la Ley 489 de 1998 o en la que la modifique o adicione.

Artículo 116. *Creación de entidades.* Corresponde a las Asambleas, conforme a lo previsto en la Constitución Política, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

Artículo 117. *Límites a las entidades descentralizadas.* Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta se hacen extensivos para los efectos de esta ley a los directores, gerentes, miembros de juntas directivas y servidores públicos de las mismas entidades del nivel departamental.

En ningún caso la asamblea elegirá o designará miembros de las juntas directivas.

Los empleados públicos que tengan derecho a designar delegados suyos en las juntas directivas lo harán con servidores de los niveles directivo o asesor.

Los diputados y los concejales no podrán hacer parte de las juntas directivas. Los particulares solo podrán formar parte de una de ellas.

Artículo 118. *Prohibición a las juntas.* Las juntas directivas no intervendrán en la tramitación ni en la adjudicación de los contratos de la entidad. Los representantes legales de las entidades serán responsables de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos.

Tampoco participarán de manera alguna las juntas directivas en la designación o retiro de los servidores de la entidad. Conforme a las disposiciones vigentes para cada caso, los respectivos representantes

legales dictarán los actos relacionados con la administración del personal al servicio de cada entidad.

Artículo 119. *A utonomía y control de tutela.* La autonomía administrativa y presupuestal de las entidades descentralizadas del orden departamental se ejercerá conforme a las normas que las organizan; y la tutela de la administración a que están sometidas tendrá por objeto el control de sus actividades y la coordinación de estas con las políticas del gobierno departamental.

Las plantas de personal de las entidades descentralizadas del orden departamental serán adoptadas por la junta directiva, a iniciativa de sus gerentes o directores, de conformidad con las normas que regulan la materia.

TÍTULO V

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Artículo 120. *Vinculación al desarrollo municipal.* Los Departamentos podrán celebrar con las organizaciones de Acción Comunal convenios para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.

Convenios: Existe convenio cuando la organización de acción comunal aporta el trabajo de sus integrantes y/o Afiliados, así como otros bienes o recursos para cumplimiento de funciones o ejecución de obras en el territorio que define el artículo 12 de la Ley 743 de 2002.

Parágrafo. Los convenios que se celebren en desarrollo de este artículo estarán sujetos a las formalidades o requisitos previstos en la ley para las entidades públicas.

TÍTULO VI

DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL Y EJERCICIO DE ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I

Coordinación de Acciones Departamentales

Artículo 121. *Coordinación departamental.* El gobernador de cada departamento, de conformidad con la Constitución Política y la ley, actuará en concordancia con los municipios y demás entes territoriales dentro del

ámbito de su competencia, ejerciendo la coordinación, seguimiento y complemento de la gestión de los municipios para la eficiente prestación de los servicios a su cargo.

Para el desarrollo efectivo del principio de coordinación, las entidades del nivel nacional deberán articular la aplicación de las políticas sectoriales a su cargo en el nivel territorial, en primera instancia con los gobernadores de cada departamento, para que estos hagan lo propio con los municipios, en segunda instancia.

Artículo 122. *Comités de coordinación.* El gobernador podrá conformar los comités de coordinación que requiera para los programas de gestión del desarrollo contemplados en su programa de gobierno o plan de desarrollo, con la participación de las entidades estatales de todos los niveles territoriales y de las organizaciones sociales cuyas actividades sean afines con el respectivo programa.

Artículo 123. *Gestión de proyectos.* Los gobernadores, en coordinación con los respectivos alcaldes dentro de su territorio, promoverán ante la Nación la gestión de proyectos de iniciativa o interés municipal de impacto regional o subregional, mediante contratos plan de manera articulada con las políticas nacionales de carácter sectorial, en el ámbito de su territorio, ajustados a los respectivos planes de desarrollo, sin perjuicio de la respectiva autonomía consagrada a cada ente territorial.

Artículo 124. *Desarrollo institucional.* El gobernador coordinará a nivel departamental las instancias, los mecanismos y los programas tendientes a promover el desarrollo institucional, conforme a las políticas nacionales.

Artículo 125. *Delegación de atribuciones.* Por medio de Contratos Plan, la Nación podrá delegar en los departamentos el ejercicio de atribuciones propias de los organismos y entidades públicas nacionales, siempre y cuando estas hagan parte integral de la visión de desarrollo territorial multisectorial. La delegación se efectuará previa constatación y verificación de las condiciones y capacidades necesarias para garantizar el adecuado desempeño de la atribución.

La Nación, en asocio con cada uno de los departamentos, adelantará un estudio para comprobar la capacidad técnica, operativa y funcional con el fin de determinar cuáles atribuciones les podrán ser delegadas al departamento.

La delegación mencionada se hará en el marco del Contrato Plan que suscribirá el jefe del organismo o entidad pública nacional con el respectivo gobernador. Se especificarán los programas, proyectos y las actividades que se delegan, los recursos necesarios para su ejecución, el estado de la delegación, así como las fases y gradualidad de la misma.

Artículo 126. Catastros departamentales. En desarrollo de la delegación de competencias mediante contrato plan, como parte de la visión territorial del departamento, los Departamentos que tengan capacidad técnica y administrativa para cumplir en todo su territorio o parte de él las funciones catastrales, solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi i (IGAC) el ejercicio de dicha competencia, mediante la modalidad de contrato plan.

Si el Instituto estuviese de acuerdo, en el convenio o contrato plan que con tal fin se celebre, se determinarán las condiciones, término y tiempo de la delegación y las ciudades y municipios para los cuales se concede. Los departamentos delegatarios cumplirán sus nuevas funciones con sujeción a las disposiciones vigentes sobre la materia y las que en el futuro se expidan.

Parágrafo. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ¿ IGAC supervisará y prestará asistencia técnica a los departamentos y ciudades en lo relacionado con las labores que desempeñen en virtud de la facultad otorgada en el presente artículo.

Artículo 127. Programas de asistencia técnica. Cuando el desempeño departamental no se efectúe en los términos y condiciones estipulados en el respectivo convenio de desempeño, la Nación establecerá un programa de mejoramiento y asistencia técnica en el que participarán las autoridades departamentales y las entidades nacionales presentes en el territorio. En este programa se definirán los tiempos y las áreas prioritarias de optimización y cualificación, así como los recursos

necesarios para su puesta en marcha. Si el departamento no cumple con las condiciones para la prestación de los servicios o el ejercicio de las competencias en los plazos establecidos, la entidad nacional correspondiente podrá reasumir las atribuciones delegadas.

Artículo 128. Criterios para delegación de atribuciones. Para efectos de la delegación de atribuciones y funciones mediante Contrato Plan previstas en la Ley 1454 de 2011, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Nivel de desarrollo económico y social.
2. Capacidad de gestión.
3. Capacidad fiscal.
4. Coherencia de la atribución que se delegue con el proyecto de visión de territorio.
5. Características del territorio.
6. Número de municipios que lo conforman.
7. Vocación económica, productiva y competitiva.
8. Circunstancias sociales, culturales, étnicas, geográficas y ecológico-ambientales.

Artículo 129. *Bonos de deuda pública y crédito.* Previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los departamentos podrán emitir títulos y bonos de deuda pública y contratar créditos internos o externos, sin exceder su capacidad de pago y dentro de las condiciones y términos que fije la ley. Para tal efecto, estarán sujetos a la inspección y control del Ministerio de Hacienda y crédito público, entidad que emitirá controles de riesgo y advertencia frente a cada operación que implique superar los límites establecidos por el Gobierno Nacional.

Las actividades financieras que adelanten los departamentos en ejercicio de lo dispuesto en el presente artículo se deben sujetar estrictamente a los límites fijados en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO II

Coordinación de políticas nacionales

Artículo 130. *Coordinación de los servicios nacionales.* Corresponde a los gobernadores de departamento coordinar y supervisar en su jurisdicción los servicios nacionales en las condiciones que se señalan en esta ley o en las diversas normas sectoriales.

Para los efectos del presente artículo, los gobernadores podrán, además de lo previsto en esta ley

1. Solicitar a los funcionarios nacionales informes generales o detallados acerca de las actividades realizadas y citarlos a los comités de coordinación departamentales.

2. Hacer seguimiento, directamente o por intermedio de funcionarios del nivel directivo, a la marcha de los planes y programas de los organismos del orden nacional que operen en el departamento para efectos de formular a los responsables las observaciones pertinentes con miras a asegurar su cumplimiento.

3. Asumir de manera temporal la competencia de la prestación de servicios de educación, salud y agua potable de sus municipios en el marco del Decreto 028 de 2008 y normas que lo reglamenten y/o modifiquen.

4. Ejercer las demás funciones que le sean delegadas.

Artículo 131. *Consejos de Gobierno.* Además de los Secretarios de despacho y los funcionarios del gobierno departamental, podrán participar en los Consejos de Gobierno Departamental, por invitación del Gobernador, los Gerentes o Directores Seccionales de las entidades del Gobierno Nacional que ejerzan sus funciones en la respectiva jurisdicción y los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.

CAPÍTULO III

Coordinación de políticas municipales

Artículo 132. *Junta Departamental de Coordinación Municipal.* En cada departamento funcionará una Junta Departamental de Coordinación Municipal encargada, entre otras funciones, de coordinar, apoyar y

complementar la acción de los municipios de su territorio y de facilitar la intermediación entre estos y la Nación.

También corresponde a la Junta concertar los términos del apoyo, coordinación y asistencia técnica, financiera y administrativa que el departamento debe prestar a los municipios que lo requieran, en cuanto a las obras y los servicios que a estos les atribuya la Constitución o la ley.

De igual forma, evaluar y proponer la creación de pactos regionales y administrativos entre dos o más departamentos, y la potencial creación de regiones administrativas y de planificación entre estos.

Así mismo, en las reuniones de la Junta los entes territoriales podrán solicitar del departamento la asesoría para el fortalecimiento de la descentralización y desconcentración de funciones y para el desarrollo institucional de la administración municipal.

La Junta estará integrada por el gobernador, quien la presidirá, y por los alcaldes de los municipios. El gobernador deberá convocar a todos los alcaldes o solo a aquellos que tengan relación con el asunto a tratar, quienes podrán estar acompañados de los funcionarios municipales relacionados con el tema a tratar según el orden del día; este deberá ser aprobado por la sesión inmediatamente anterior y deberá ser informado en la correspondiente invitación.

El gobernador podrá invitar a los representantes de las asociaciones de entidades territoriales presentes en su jurisdicción.

Igualmente, según las materias que se traten en las reuniones de la Junta, el gobernador cuando así lo considere conveniente o por solicitud de uno o más alcaldes citará a los funcionarios departamentales o nacionales que ejerzan funciones en el respectivo departamento.

El gobernador, mediante decreto, reglamentará la organización y funcionamiento de esta Junta.

Parágrafo. En los departamentos que tengan un extenso número de municipios, la junta podrá sesionar por provincias o subregiones, siempre que los temas previstos en la agenda tengan efecto sobre la porción del territorio así representada.

Artículo 133. *Delegación de funciones.* Los departamentos, en los niveles central y descentralizado, podrán delegar en las entidades territoriales, en las Áreas Metropolitanas y en las asociaciones de entidades territoriales, atribuciones propias de los organismos de la atención de funciones o servicios, o el desarrollo integral de programas y proyectos, mediante la celebración de convenios o contratos plan que garanticen la asignación de los recursos suficientes que permitan cumplir con la actividad delegada.

También podrá el departamento celebrar convenios interadministrativos con los municipios y distritos para la prestación por parte de la administración local de las funciones y servicios nacionales y seccionales o para el desarrollo de proyectos de propósito común.

TÍTULO VII

DEPARTAMENTOS DE FRONTERA

CAPÍTULO I

Tratamiento diferencial

Artículo 134. *Tratamiento diferencial.* Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, y con fundamento en el artículo 337 de la Constitución, los departamentos de frontera tendrán por su condición geográfica especiales competencias y funciones diferenciadas y específicas que respondan a su tipología y fortalezcan su posición de eje comercial estratégico o ambiental.

Las competencias y funciones a que se refiere este artículo se fijarán considerando las particularidades, culturales, étnicas, medioambientales, comerciales, turísticas y de infraestructura de cada entidad; aspecto que será regulado por el Gobierno Nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la sanción de la presente ley, con base en el estudio de caracterización de regiones de frontera que para tal efecto elaborará la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIIDF), creada mediante Decreto 569 de 2001, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está conformada por los Ministerios que tienen competencia en los temas fronterizos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

También participará en el estudio el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Artículo 135. *Sobre el régimen especial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.* El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en lo no contemplado expresamente en su estatuto especial, se regirá por la presente ley.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 136. El artículo 224 de la Ley 223 de 1995 quedará así:

Artículo 224. *Fondo-Cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros.* Créase un Fondo-Cuenta especial dentro del presupuesto de la Federación Nacional de Departamentos, en el cual se depositarán los recaudos por concepto de los impuestos al consumo de productos extranjeros. La administración, la determinación de los gastos de administración con cargo a los recaudos en un valor de 2% de los mismos, la destinación de los rendimientos financieros, y los mecanismos para dirimir las diferencias que surjan por la distribución de los recursos del Fondo-Cuenta serán establecidos por la Asamblea General de Gobernadores y del Alcalde del Distrito Capital, mediante acuerdo de la mayoría absoluta. Estos recursos estarán sometidos al control fiscal de las Contralorías Departamentales y del Distrito Capital una vez se incorporen a los presupuestos de las entidades territoriales titulares de los mismos.

Parágrafo. Se excluye al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del cumplimiento del presente artículo.

Artículo 137. *Gaceta Departamental.* En cada uno de los departamentos se publicará una Gaceta Departamental, como órgano oficial de publicación de los actos seccionales, en la que se incluirán los siguientes documentos:

1. Las ordenanzas de la Asamblea Departamental.
2. Los actos que expida la Asamblea y su Mesa Directiva para la ejecución de su presupuesto y el manejo del personal a su servicio.
3. Los decretos y resoluciones del gobernador.

4. Los actos de la administración central y descentralizada del departamento que creen situaciones jurídicas impersonales u objetivas o que tengan alcance e interés general.

5. Las demás que la ley o la ordenanza señalen que deben publicarse.

6. Los contratos celebrados por las entidades del orden departamental.

Artículo 138. *Definiciones de autoridad.* Para efectos de lo previsto en esta ley, por autoridad civil, política, administrativa y militar se entenderá lo definido al respecto por la Ley 136 de 1994.

Artículo 139. *Concepto previo para la constitución de Región Administrativa y de Planificación.* Las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, conforme a su competencia, emitirán concepto cuando se presente solicitud de los gobernadores interesados en constituir, mediante convenio, una Región Administrativa y de Planificación, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por las Mesas Directivas de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

Artículo 148. *Organización e integración de las asambleas.* Las asambleas departamentales se podrán agremiar en una federación, la cual será el vocero de las Asambleas y diputados frente a los instrumentos Gubernamentales y Organismos Nacionales e Internacionales. Las Asambleas podrán hacer sus aportes para el funcionamiento de la federación.

Artículo 149. Las entidades territoriales, en concertación con las respectivas juntas de acción comunal, podrán adelantar obras en los bienes de propiedad de las juntas de acción comunal, y previo estudio de los títulos de propiedad del inmueble.

Artículo 150. Consejo Nacional de Gobernadores. Créase el Consejo Nacional de Gobernadores como instancia de coordinación y ejecución de las políticas públicas sectoriales en el nivel territorial con carácter permanente, el cual será Presidido por el Presidente de la República.

La Secretaría Técnica será ejercida por el Ministerio del Interior. El Consejo se reunirá periódicamente cada tres meses.

El Gobierno Nacional reglamentará sus funciones.

Artículo 151. Facúltase al Gobierno Nacional para compilar la normatividad vigente en materia de régimen departamental en todo aquello que sea regulado por la presente ley y las demás normas vigentes en la materia.

Artículo 152. *Vigencia.* La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.

De los honorables Congresistas,